



España es uno de los países que se resiste a retirar este tipo de ayudas

La Comisión señala además que únicamente ocho Estados –Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Portugal– han manifestado su intención de eliminar completamente estas



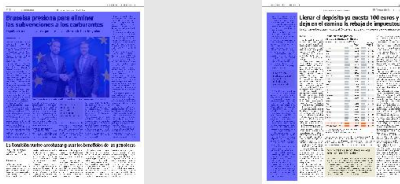
Ayudas a las renovables

En paralelo, las ayudas a las energías renovables repuntaron un 39%, hasta los 76.000 millones de euros. La energía solar recibió cer-

ca de 30.000 millones, el 39% del apoyo renovable, por delante de la bioenergía, con 15.000 millones, y de la eólica, con 9.000 millones. El informe sitúa a España entre los países que concentran una mayor proporción de sus ayudas renovables en la tecnología so-

Pese a la retirada de parte de las medidas anticrisis, las ayudas temporales destinadas a contener los precios energéticos todavía sumaron 98.000 millones de euros en 2024. Descendieron un 38% respecto al ejercicio anterior, pero la Comisión recuerda que los Estados no cumplieron plenamente el objetivo europeo de extinguir estas medidas durante 2024.

La advertencia responde a la experiencia de la crisis de 2022. Los Veintisiete movilizaron entonces importantes recursos públicos para contener las facturas de electricidad, gas y carburantes, pero bue-



na parte de las medidas benefició indistintamente a consumidores vulnerables y hogares con mayor capacidad económica. También redujo las señales de precio que debían incentivar el ahorro energético, la eficiencia y la sustitución de los combustibles fósiles.

Bruselas no plantea, por tanto, que los gobiernos renuncien a intervenir ante una nueva emergencia. Su petición es que las ayudas se diseñen de forma más precisa. En el caso de los hogares, podrían concentrarse en consumidores vulnerables, mediante transferencias directas, bonos sociales o mecanismos vinculados a la renta, en lugar de abaratar de manera generalizada el precio de la energía. Para la industria, el apoyo debería dirigirse a las empresas intensivas en energía y expuestas a la competencia internacional, con el objetivo de evitar cierres, deslocalizaciones o pérdidas de producción provocadas por una crisis excepcional.

Europa quiere medidas precisas y con plazos definidos para ajustar su coste

La Comisión añade otra condición: las medidas de emergencia deben contribuir, o al menos no obstaculizar, la transición energética. Por este motivo, considera que parte de los recursos debería utilizarse para acelerar la electrificación, mejorar la eficiencia, desplegar energías renovables y reducir estructuralmente la dependencia europea del gas y el petróleo importados. La intención es que las ayudas no se limiten a compensar el encarecimiento de los combustibles fósiles, sino que ayuden a disminuir su consumo futuro.

Por ello, Bruselas pide que las nuevas intervenciones incorporen desde su aprobación una fecha de caducidad, criterios claros para determinar los beneficiarios y mecanismos que permitan retirarlas cuando desaparezca la situación excepcional. El objetivo es impedir que las medidas concebidas para responder a una crisis coyuntural se conviertan en subvenciones permanentes al consumo de combustibles fósiles.

La Comisión intenta marcar así una diferencia entre proteger temporalmente a hogares e industrias y subvencionar de forma estructural el uso de gas, petróleo o carbón. En su planteamiento, una nueva crisis puede justificar ayudas públicas, pero no alterar la dirección de la política energética europea: reducir la exposición a los combustibles importados, acelerar la electrificación y eliminar progresivamente las subvenciones fósiles. La industria, por su parte, sigue quejándose de los elevados costes de la energía y pide medidas urgentes.